



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, siete (7) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

Medio de control: Ejecutivo

Radicado: 15001 33 33 004 **2018 0240 00**

Demandante: Diana Yaneth Castro Piracón y otros

Demandado: Fiscalía General de la Nación

I. ASUNTO

Procede el Despacho a pronunciarse sobre el mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo promovido por la Diana Yaneth Castro Piracón y otros contra la Nación – Fiscalía General de la Nación.

II. ANTECEDENTES

La parte demandante solicitó se libre mandamiento ejecutivo a su favor y en contra de la Fiscalía General de la Nación, en los siguientes términos:

“PRIMERA. Que se libre mandamiento de pago por la vía ejecutiva a favor de mis poderdantes y contra la demandada Nación – Fiscalía General de la Nación, así.

Por la suma equivalente en pesos de:

A. Perjuicios materiales Lucro Cesante

Para Carlos Javier Castro Piracón, la suma de \$1.639.652, de acuerdo lo consignado en la sentencia

B. perjuicios morales

- 14 SMLMV, para Carlos Javier Castro Piracón*
- 10,5 SMLMV, para Para José Joaquín Castro Plazas*
- 10,5 SMLMV, para Reina María Piracón Puerto*
- 7 SMLMV, para Jinne Ariel Castro Piracón*
- 7 SMLMV, para Diana YanethCastro Piracón*

Según lo establecido en la sentencia por perjuicios morales.

SEGUNDA. Por los intereses moratorios del capital, des de la fecha en que cobró ejecutoria la sentencia y hasta cuando sea totalmente cancelada.

TERCERA. Se condene en costas a la parte demandada.”

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Competencia

En los términos de los artículos 104 numeral 6 y 297 del CPACA, este Juzgado es competente para conocer de la presente ejecución, toda vez que se demanda por vía ejecutiva el pago del acuerdo conciliatorio aprobado por el Tribunal Administrativo de Boyacá en audiencia de 3 de septiembre de 2013, dentro del proceso de Reparación Directa N° 15001 2331 001 2006 02351 00, y que cobró ejecutoria el 6 de septiembre de 2013.

De otro lado, en virtud del numeral 7 del artículo 155 *ejusdem*, este Despacho es competente para conocer de esta demanda en razón de la cuantía, al encontrar que la misma no supera la suma de mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigente (f. 10).

Caducidad

La demanda fue interpuesta dentro de la oportunidad legal que corresponde de conformidad al artículo 164 num 2, literal K del CPACA, por cuanto la sentencia cobro ejecutoria el **6 de septiembre de 2013** (fl. 12), y una vez transcurren los dieciocho (18) meses de que trata el art 177 del C.C.A, se advierte que no operó el término de la caducidad de los cinco años de que trata la norma, pues la acción ejecutiva fue promovida el **27 de noviembre de 2018** (fl. 11 y 47).

Del Título Ejecutivo:

En los términos del artículo 297 del CPACA, constituyen título ejecutivo para esta jurisdicción, entre otros documentos, los siguientes:

“Artículo 297. Título ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

...2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible. (...)”

Con relación al contenido del título ejecutivo, el artículo 422 del Código general del Proceso dispone:

“Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señálela ley....”.

A su turno, el Consejo de Estado ha señalado que el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil (hoy art. 422 del CGP), estableció las condiciones formales y de fondo que debe reunir el título ejecutivo, las primeras, en el sentido de que los documentos que integran el título conformen una unidad jurídica, es decir, que sean **auténticos**, y que emanen del deudor o de su causante; de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, de otra **providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, de las providencias que en procesos contencioso administrativos** o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia; las segundas, por su parte, buscan que en los documentos que sirven de base para la ejecución aparezcan consignadas obligaciones claras, expresas y exigibles a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado, y que sean líquidas o liquidables por simple operación aritmética, en el caso de obligaciones pagaderas en dinero.¹

Bajo las anteriores precisiones, y teniendo en cuenta los documentos aportados por la parte demandante, es pertinente señalar cuáles son los documentos que integran el título ejecutivo, que para el caso que nos ocupa es un título ejecutivo complejo.

Pues bien, cuando la obligación proviene de una providencia judicial, debe integrarse el título ejecutivo complejo con la copia de la respectiva providencia judicial con constancia de ejecutoria, así como aquellos documentos que permitan consolidar la obligación clara, expresa y exigible.

Cuando se ejecuta, entonces, con fundamento en un título ejecutivo complejo, es indispensable que todos y cada uno de los documentos que lo conforman, en su conjunto, evidencie la existencia de la obligación con las características previstas en el artículo 422 del CGP, y sean aportados en legal forma para poder librar mandamiento de pago.

¹ Consejo de Estado, C.P. María Elena Giraldo Gómez, auto de 16 de septiembre de 2004, radicado bajo el número 26.726

En este caso, tenemos que el Tribunal Administrativo de Boyacá, en Sala de Decisión de Descongestión N° 10, dictó sentencia condenatoria de primera instancia el 25 de julio de 2012, dentro del proceso de Reparación Directa N° 15001 2331 001 2006 02351 00 (fls. 14 a 37), mediante la cual condenó en concreto al pago de perjuicios materiales y morales. En desarrollo de audiencia de conciliación post-fallo que tuvo lugar el 3 de septiembre de 2013, las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio que fue aprobado por el Tribunal en esa misma audiencia (fls. 38-39), decisión que cobró ejecutoria a partir de las cinco de la tarde (05:00 pm) del 6 de septiembre de 2013, según constancia secretarial (fl. 12), los documentos antes referidos son aportados en copia auténtica y con su respectiva constancia de ejecutoria, por lo que prestan mérito ejecutivo.

También conforman el título ejecutivo complejo, los siguientes documentos:

- Copia la solicitud de pago de conciliación elevada el accionante por intermedio de su apoderado judicial ante la Fiscalía General de la Nación, con recibido de 28 de marzo de 2014 (fl. 41-42).
- Copia de complementación de la solicitud pago de conciliación elevada el accionante por intermedio de su apoderado judicial ante la Fiscalía General de la Nación, con recibido de 10 de noviembre de 2014 (fl. 45).
- Copia de oficio "Radicado No. 20141500062801" de 1 de septiembre de 2014 expedida por la Fiscalía General de la Nación en la que requieren complementación de solicitud pago de conciliación (fl. 46).
- Copia de oficio "Radicado No. 20141500087111" de 13 de noviembre de 2014 expedida por la Fiscalía General de la Nación en la que comunican al ejecutante que fue incluido en turno para el pago de conciliaciones el 10 de noviembre de 2014 (fls. 47-48).

De lo anterior, se puede extraer que el título ejecutivo base de la acción es un título complejo, y que reúne las **condiciones formales** ya señaladas, de conformidad con el artículo 297 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011, pues, además de aportarse de manera completa el título que da origen a la obligación, se verifica que la entidad llamada a responder es la Nación – Fiscalía General de la Nación.

En este punto, corresponde examinar si los documentos aportados reúnen los requisitos de **fondo**, que hacen relación a la existencia de una obligación clara, expresa y actualmente exigible, en tanto que el mandamiento de pago solo procederá cuando los documentos anexados para el recaudo ejecutivo no dejan duda al juez de instancia, de la existencia de la obligación que se dice incumplida, dada su claridad, su condición de expresa y su exigibilidad.

Respecto al requisito de **claridad** de la obligación exigido por el artículo 422 del CGP, es pertinente advertir que una obligación es ejecutivamente clara, porque en el documento constan todos los elementos que la conforman o le dan entidad, es decir, se conoce quién es el deudor, quién el acreedor y lo debido, esto es, el objeto de la prestación cuya satisfacción se reclama; se trata de una obligación **expresa**, o sea enunciada de modo inconfundible, en el documento que sirve de título, y **exigible**, porque no está sujeta a plazo o condición, lo que permite reclamar su cumplimiento.

En el caso concreto, los documentos que hacen parte del título ejecutivo indican la existencia de una obligación a favor de los ejecutantes y a cargo de la Nación – Fiscalía General de la Nación, derivada de la conciliación judicial frente a la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del proceso de Reparación Directa N° 15001 2331 001 2006 02351 00 (fls. 14 a 37), que impuso una condena en los siguientes términos:

***“TERCERO.** Como consecuencia de lo anterior, SE CONDENA a LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a título de indemnización por los daños causados, las siguientes sumas:*

a) En la modalidad de perjuicios materiales por lucro cesante: la suma de \$2'342.360 al señor CARLOS JAVIER CASTRO PIRACÓN.

b) En la modalidad de perjuicios morales:

- Veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para el señor Carlos Javier Castro Piracón*
- Quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para el señor José Joaquín Castro Plazas*
- Quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la señora Reina María Piracón Puerto*
- Diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el señor Jinne Ariel Castro Piracón.*
- Diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la señora Diana Yaneth Castro Piracón.”*

En el acuerdo conciliatorio, la entidad ejecutada propuso que pagaría “hasta el setenta por ciento (70%) de la totalidad del monto de la condena conforme a la parte resolutive de la misma”, haciendo claridad de que en caso de aceptación de la formula “el pago se regulará por lo normado en los artículos 176 y 177 del CCA”, propuesta que fue aceptada por la parte demandante y aprobada por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

De lo anterior, se advierte que en el acuerdo conciliatorio impone a la Nación – Fiscalía General de la Nación una obligación clara y expresa, frente al monto y las condiciones para el cumplimiento de la obligación asumida por la entidad ejecutada, consistente en pagar el 70% de la condena impartida en sentencia proferida dentro del proceso de Reparación Directa N° 15001 2331 001 2006 02351 00, en las condiciones precisadas en la parte resolutive de la sentencia.

En cuanto a su exigibilidad, es pertinente señalar que el plazo aplicable es el contemplado en el título base de reclamación, hace referencia al artículo 177 del CCA, el cual prevé que las condenas a entidades estatales serán ejecutables 18 meses después de su ejecutoria. En este orden, teniendo presente que la decisión en mención cobró ejecutoria el 6 de septiembre de 2013 (fl. 12), los dieciocho (18) meses de que trata la norma en mención se cumplieron el 5 de marzo de 2015. Por tanto, al momento de presentación de la demanda, esto es, el 27 de noviembre de 2018 (fl. 11 y 49) este plazo se encontraba superado, sin que hubiera caducado la acción. Estas razones llevan a colegir que la obligación contenida en el título ejecutivo complejo cumple también con el requisito de ser exigible actualmente.

Ahora bien, a efecto de establecer si las sumas señaladas como pretensiones en la demanda, corresponden a los montos adeudados por la entidad, respecto a los cuales sería procedente librar mandamiento de pago a favor de los demandantes y contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación, atendiendo la condena impuesta dentro del proceso de Reparación Directa N° 15001 2331 001 2006 02351 00, proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Boyacá y al acuerdo conciliatorio alcanzado por las parte en audiencia de 3 de septiembre de 2013, el Despacho encuentra que:

- A Carlos Javier Castro Piracón en la condena se le reconocieron \$2.342.360 por concepto de indemnización por perjuicios materiales lucro cesante, y 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que correspondían a \$11.790.000 por concepto de perjuicios morales, para un total de \$13.429.652.
- A José Joaquín Castro Plazas en la condena le reconocieron 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que correspondían a \$8.842.500, por concepto de perjuicios morales.
- A Reina María Piracón Puerto en la condena le reconocieron 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que correspondían a \$8.842.500, por concepto de perjuicios morales.

- A Jinne Ariel Castro Piracón en la condena le reconocieron 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que correspondían a \$5.895.000, por concepto de perjuicios morales.
- A Diana Yaneth Castro Piracón en la condena le reconocieron 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que correspondían a \$5.895.000, por concepto de perjuicios morales.

Los demandantes y la Fiscalía General de la Nación lograron acuerdo conciliatorio por el 70 % de esas sumas por lo que la obligación de la ejecutada frente a cada uno de los demandantes corresponden a los siguientes valores:

Demandante	Monto a recibir por conciliación judicial (70% de la condena)
<i>Carlos Javier Castro Piracón</i>	\$9.400.756
<i>José Joaquín Castro Plazas</i>	\$6.189.750
<i>Reina María Piracón Puerto</i>	\$6.189.750
<i>Jinne Ariel Castro Piracón.</i>	\$4.126.500
<i>Diana Yaneth Castro Piracón</i>	\$4.126.500

Sumas por las cuales se libraré el mandamiento de pago por concepto de capitales adeudados.

Frente a los intereses se reitera que el cumplimiento del acuerdo quedó sujeto a las previsiones de cumplimiento de la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá que impuso la condena en primera instancia, por lo que se causarían de conformidad a las prescripciones del artículo 177 del CCA, esto es, desde el día siguiente la ejecutoria de la providencia hasta la fecha del pago efectivo, con suspensión en caso de que el beneficiario no acuda a la entidad responsable en procura del cumplimiento, acompañando la documentación necesaria, cumplidos los seis meses siguientes a la ejecutoria de la providencia y hasta el día que se presente la solicitud en legal forma.

En el caso concreto, encuentra el Despacho que dado que la ejecutoria de la providencia fue el 6 de septiembre de 2013 (fl. 12), y que la solicitud de cumplimiento se presentó en forma legal hasta el 11 de noviembre de 2014 (fl. 45), los intereses moratorios del artículo 177 del CCA se causaron entre el 7 de septiembre de 2013 y el 6 de marzo de 2014, momento en que se suspendió su causación hasta el 11 de noviembre de 2014, fecha desde la que se causarán hasta el día en que se materialice el pago.

Por lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Tunja,

RESUELVE

PRIMERO.- Librar mandamiento de pago en contra de la **Fiscalía General de la Nación** por los siguientes conceptos y sumas de dinero:

1. *Por la suma de \$9.400.756 a favor de Carlos Javier Castro Piracón, más los intereses causados por ese capital entre el 7 de septiembre de 2013 y el 6 de marzo de 2014, y el 11 de noviembre de 2014 y la fecha en que se materialice el pago.*
2. *Por la suma de \$6.189.750 a favor de José Joaquín Castro Plazas, más los intereses causados por ese capital entre el 7 de septiembre de 2013 y el 6 de marzo de 2014, y el 11 de noviembre de 2014 y la fecha en que se materialice el pago.*
3. *Por la suma de \$6.189.750 a favor de Reina María Piracón Puerto, más los intereses causados por ese capital entre el 7 de septiembre de 2013 y el 6 de marzo de 2014, y el 11 de noviembre de 2014 y la fecha en que se materialice el pago.*
4. *Por la suma de \$4.126.500 a favor de Jinne Ariel Castro Piracón, más los intereses causados por ese capital entre el 7 de septiembre de 2013 y el 6 de marzo de 2014, y el 11 de noviembre de 2014 y la fecha en que se materialice el pago.*
5. *Por la suma de \$4.126.500 a favor de Diana Yaneth Castro Piracón, más los intereses causados por ese capital entre el 7 de septiembre de 2013 y el 6 de marzo de 2014, y el 11 de noviembre de 2014 y la fecha en que se materialice el pago.*

SEGUNDO.- Notificar personalmente del contenido de esta providencia al representante legal de la Nación - Fiscalía General de la Nación, de conformidad con los artículos 197 y 199 del CPACA, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, mediante mensaje dirigido al buzón de correo electrónico para notificaciones judiciales dispuesto para tal efecto por la entidad, anexando copia de esta providencia y de la demanda. Póngasele de presente que las copias de la demanda y sus anexos quedarán en la secretaría del Despacho a su disposición. Hecha la notificación, por Secretaría remitir de manera inmediata y a través de servicio postal autorizado, copia de la demanda, de sus anexos y del mandamiento de pago.



TERCERO.- Notificar personalmente el contenido de esta providencia al Agente del Ministerio Publico delegado ante este Despacho Judicial y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de conformidad con los artículos 197 y 199 del CPACA, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, mediante mensaje dirigido al buzón de correo electrónico para notificaciones judiciales dispuesto para tal efecto por estas entidades, anexando copia de la presente providencia y de la demanda.

CUARTO.- Notificar del contenido de esta providencia a la parte demandante y a su apoderado de conformidad con el artículo 201 del CPACA, esto es, por ESTADO.

QUINTO.- La parte actora deberá sufragar los gastos de notificación, consignando la suma de **OCHO MIL QUINIENTOS PESOS (\$ 8.500.00) M/CTE,** que corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO	VALOR
Envío a través del servicio postal autorizado de copia de la demanda, anexos y auto admisorio a la Nación - Fiscalía General de la Nación	\$ 9.000
TOTAL	\$ 9.000

Dicho valor deberá ser consignado en la **cuenta de ahorros No. 4-1503-0-21081-1 del Banco Agrario de la ciudad de Tunja, Convenio N° 13226** y acreditar su pago ante la Secretaría del Juzgado, dentro de los cinco (05) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia. Si al vencimiento del plazo previsto en el artículo 178 del CPACA, no se acredita el pago de los gastos procesales, se entenderá que el demandante ha **desistido** de la demanda y se procederá de conformidad con lo establecido en el precitado artículo.

SEXTO.- Conceder a la parte demandada el término de cinco (5) días para que efectúe el pago de la obligación por la cual se le ejecuta, conforme lo señala el artículo 431 del CGP. Dicho término comenzará a correr veinticinco (25) días después de surtida la notificación, de conformidad con el art. 199 del CPACA.


SÉPTIMO.- La parte demandada, cuenta con el término de diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, para proponer excepciones, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 442 del C.G.P, se reitera que este término, comenzará a correr veinticinco (25) días después de surtida la notificación de conformidad al art. 199 del CPACA.

OCTAVO.- Reconocer personería al abogado **Ciro Nolberto Guecha Medina**, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.770.212 y TP. 54.651, como apoderado especial de la parte demandante, de conformidad con el poder obrante a folio 1-4 del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ
Juez

²Cesco

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA	
NOTIFICACIÓN POR ESTADO	
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO ELECTRÓNICO	
N°	De Hoy 8 de marzo de 2019 A LAS 8:00 a.m.
	
FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ SECRETARIO	

² Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 8 de marzo de 2019 en la página web www.ramajudicial.gov.co. Ferney Mauricio Díaz Hernández Secretario